

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023.

Señores
JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DE CALI.
E. S. D.

Referencia: Reparación Directa de Gustavo Alfonso Muñoz Criollo contra la Invias y Otros.

Expediente: 760013333009220230004200.

Asunto: Contestación del Llamamiento en Garantía.

Respetados señores:

ALVARO DIAZGRANADOS DE PABLO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 85.154.567 expedida en la ciudad de Santa Marta y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 206.576 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del CONSORCIO EURO-MUR, identificado con el NIT 901.407.665-4, integrado por las sociedades EUROCONTROL S.A. con NIT 901.179.558-5 y MUR PROYECTOS S.A.S. con NIT 800.169.622-1, procedo a presentar **CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** presentado por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, dentro del proceso indicado en la referencia, según consta en el poder que reposa en el expediente junto con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de conformidad con lo siguiente:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL

Nos oponemos a la totalidad de las pretensiones esgrimidas en esta acción de reparación directa, por cuanto en este caso NO existió responsabilidad alguna por parte de mi poderdante. Adicionalmente, deben desestimarse las pretensiones por ausencia de prueba e inexistencia de elementos de juicio que impliquen la existe de un nexo causal con el CONSORCIO EURO- MUR llamado en garantía, por tanto, solicito al Despacho se desvincule del proceso a mi prohijada y se declaren probadas las excepciones sobre las que se apoya la presente defensa.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA ACCIÓN

Respecto de los hechos y omisiones descritos en la demanda, me permito pronunciarme en los siguientes términos:

Al hecho 1: No nos consta ninguna de las circunstancias referidas en este numeral, como quiera que en mi calidad de apoderado judicial del Consorcio, soy totalmente ajeno a las mismas. Sobre el particular, me atengo a lo que en el proceso resulte demostrado.

Al hecho 2: No nos consta ninguna de las circunstancias referidas en este numeral, como quiera que en mi calidad de apoderado judicial del Consorcio, soy totalmente ajeno a las mismas. Sobre el particular, me atengo a lo que en el proceso resulte demostrado.

Al hecho 3: No nos consta ninguna de las circunstancias referidas en este numeral, como quiera que en mi calidad de apoderado judicial del Consorcio, soy totalmente ajeno a las mismas. Sobre el particular, me atengo a lo que en el proceso resulte demostrado.

Al hecho 4: No nos consta ninguna de las circunstancias referidas en este numeral, como quiera que en mi calidad de apoderado judicial del Consorcio, soy totalmente ajeno a las mismas. Sobre el particular, me atengo a lo que en el proceso resulte demostrado.

Al hecho 5: No es cierto. Sea lo primero indicar que el CONSORCIO EURO- MUR fue celebró el contrato 1163 de 2020 con el INVIAS para realizar la interventoría para la gestión y mantenimiento vial integral de las carreteras troncal de occidente y alternas a la troncal, departamentos del Cauca y Valle de Cauca.

Si bien es cierto el accidente fue con ocasión a la caída de las ramas de un árbol, circunstancia que no desconocemos, no se puede inferir que dicha caída fue con ocasión a la falta de mantenimiento del corredor vía ni a un mal estado del mismo, toda vez que los mantenimientos eran periódicos y constantes so pena de incumplimiento del contrato celebrado con el Invias. Pese a lo indicado, nos sostenemos en que nuestro contrato estaba ceñido exclusivamente a las labores de atención y cuidado de los requerimientos efectuados por el Invias para atender llamados puntuales de atención vial, es decir que se requiriera efectuar alguna reparación inmediata, lo que indica sin lugar a equívocos que la entidad contratante bajo ninguna circunstancia perdió el cuidado y atención del corredor. Atendíamos casos puntuales de mantenimiento.

Al hecho 6: No nos consta ninguna de las circunstancias referidas en este numeral, como quiera que en mi calidad de apoderado judicial del Consorcio, soy totalmente ajeno a las mismas. Sobre el particular, me atengo a lo que en el proceso resulte demostrado.

Al hecho 7: No es un hecho.

III. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL CON EL CONSORCIO EURO- MUR

La responsabilidad puede definirse como la obligación de reparar un daño injustamente causado a otro. Lo anterior implica el hecho de que exista un *daño*, una *imputación* y un *llamado a reparar*, para que surja el deber de reparar. Para el caso que nos ocupa, no existe responsabilidad de parte del Consorcio ni mucho menos se encuentra sustentada la existencia del nexo causal entre el hecho y el daño endilgado a mi apoderada, considerando lo siguiente:

Lo primero sea analizar cuál es el alcance de las obligaciones generales estipuladas dentro del contrato de interventoría No. 1163 de 2020 celebrado con el Invias. Al respecto encontramos:

“CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: **1.** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **2.** Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. **3.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. **4.** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **5.** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). **7.** Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. **8.** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. **9.** Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. **10.** Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. **11.** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **12.** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). **13.** Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. **14.** EL

INTERVENTOR para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de familia y/o víctimas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. 15. EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. 16. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 17. EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones. 18. El INTERVENTOR, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 19. El Interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019, 666 de 2020 y el Decreto 531 de 2020. 20. El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación.”

De lo expuesto, si bien es cierto que el objeto del contrato implica el mantenimiento vial integral de todo el recorrido, esto no implica que se deba desbordar de su ámbito de competencia o atribuirse funciones que no fueron pactadas y que le competen a otras entidades como es el caso de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA**. Como prueba de ello iremos analizando cada una de las cláusulas tanto del contrato como del pliego, con el fin de demostrar tal y como se hizo con las obligaciones generales, que el cuidado, atención y gestión forestal no era de la órbita contractual del interventor.

DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las cláusulas a resaltar de la eventuales obligaciones específicas relacionadas con el mantenimiento y control de los árboles, podemos resaltar:

13. **“Mantenimiento rutinario:** Para el presente proceso se entiende por mantenimiento rutinario, el conjunto de las actividades a ejecutar en vías pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía. Las principales actividades son: Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; Rocería; Limpieza de obras de drenaje; Reconstrucción de cunetas y Reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; Reparación de baches en afirmado y/o parcheos en pavimento, sin maquinaria y/o equipo.”
21. **“Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación:** Para el presente proceso se entiende por proyectos de mantenimiento periódico, el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las principales actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales; Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstrucción de obras de drenaje; Construcción de obras de protección y drenajes; Demarcación lineal; Señalización vertical.”

Al respecto se puede concluir que en su mayoría las actividades de intervención y mantenimiento están orientadas a la debida ejecución de las obras civiles, sin que ello implique necesariamente que los contratistas tengan a su cargo el control de los árboles. Elementos necesariamente responden al cuidado y control exclusivo de la autoridad ambiental, es decir, un tercero.

Del MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL

Respecto de las obligaciones que le incumben a la interventoría podemos resaltar las siguientes:

“OBJETIVO.

*Durante el desarrollo integral del contrato deberá ejecutarse la Gestión Vial del corredor asignado, la cual incluye la ejecución de actividades de Gestión Técnica y Operativa, Administración Vial, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico, Prevención y Atención de Emergencias, Servicios al Usuario, Señalización y Seguridad Vial, Sostenibilidad y otras obras sobre la infraestructura en los tramos que se definan; todo lo anterior de **acuerdo con la disponibilidad de recursos asignados.***

Los procedimientos de acción tendientes a cumplir con las particularidades de la Gestión Vial Integral deberán establecerse de manera coordinada entre el contratista de obra, el Interventor y el INVIAS a través de las Direcciones territoriales correspondiente.”

Este es uno de los apartes más importantes dentro de nuestro escrito de defensa, dado que, dentro de los presupuestos asignados por la entidad, en ninguno de sus ítems contempla la contratación de personal ambiental relacionado con la ingeniería forestal que hiciera la intervención o recomendación de árboles. Pese a ello se hacían las recomendaciones de tala que en eso precisamente quedaban, solo en recomendaciones, debido a que los contratistas no tenían competencia para realizar intervenciones directas. Estos inventarios estaban en cabeza exclusiva de la autoridad ambiental y no teníamos las atribuciones para hacer podas sino únicamente prestar el personal en caso que se requiriera, tal y como se indicará más adelante.

De las obligaciones del contratistas indicadas dentro del manual.

“5.10.3 PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES

El Contratista de Obra, debe obtener todos los permisos de carácter ambiental y social para ejecutar las obligaciones del contrato, y obtenerlos en los términos establecidos en el respectivo pliego de condiciones y demás documentos contractuales en concordancia con los lineamientos establecidos por las autoridades ambientales y sociales.

El Contratista de obra en ningún caso, puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o autorizaciones ambientales y sociales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de estos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones pertinentes establecidas en el respectivo pliego de condiciones y en este manual.”

“ALCANCE

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo con las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de los trabajos, logística de personal, y logística de transporte; de manera general se tienen las siguientes actividades:

(...)

- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.”

Si bien es cierto que dentro del glosario encontramos la definición de lo que se debe entender por mantenimiento rutinario y que dentro de esta se encuentra la actividad de rocería, nuestro objeto en esta defensa se centrará en determinar si las actividades de poda tiene el alcance de

los cuerpos arbóreos ubicados dentro del corredor vial o solo se limita al corte de pasto o hiervas que puedan llegar a la carretera.

Al respecto, el mismo Manual establece que de las labores de tala de árboles se debe tener en cuenta lo siguiente:

“5.3.1.4 ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

En el desarrollo del Contrato de Obra, el Contratista se obliga a realizar las actividades de mantenimiento rutinario que se relacionan a continuación y su cumplimiento o desempeño se medirán de acuerdo con los siguientes indicadores de:

Poda, corte y/o retiro de árboles. Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles.”

Dentro de lo establecido dentro del Manual de Gestión Integral, si bien es cierto que existe la obligación contractual de realizar la poda de los árboles, esta no es una actividad automática y libre que recaiga sobre el contratista ni mucho menos sobre el interventor, de manera que tal y como se determinó en la cláusula referida, la poda solo se limitará a colocar la mano de obra cuando la entidad requiera la poda del material arbóreo, sin que ello implique que se tenga el control pleno de las intervenciones dado que el cuidado y control solo recae sobre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA**.

Del APENDICE GESTION AMBIENTAL

“En todo caso, si durante la ejecución del contrato, se requiere el trámite de Licenciamiento Ambiental, la interventoría deberá realizar la revisión y seguimiento a la elaboración de los estudios ambientales necesarios (Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudio de Impacto Ambiental EIA y Otros) y el proyecto ya no se ejecutará siguiendo los lineamientos de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, sino que deberá tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga, para lo cual la interventoría deberá realizar el seguimiento y control respectivo a la gestión necesaria para la obtención de la respectiva Licencia Ambiental y exigir el cumplimiento de la misma.”

Por su parte, el demandante dentro de su escrito asevera que existe responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de mantenimiento o conservación de la carretera, en relación con las especies arbóreas que fueron sembradas y sin prestar un adecuado manejo, supervisión, conservación, preservación y recuperación en la berma de la vía. Ahora bien, del estudio de las pruebas aportadas por la parte actora, ninguna permite inferir que el accidente tuvo como origen la falta de acción del CONSORCIO EURO- MUR en los operativos de cuidado de la vía afectada y que llevaría a determinar la existencia de una falla del servicio, específicamente si dentro del contrato las únicas labores de mantenimiento relacionadas con las actividades de rocería son la de los prados y vegetación que no implican especies arbóreas.

Para el caso que nos ocupa, en el evento de requerir un eventual proceso de licenciamiento ambiental, nuestra obligación no concernía al proceso del reporte de la necesidad o estructuración de la eventual intervención, ya que nuestra obligación contractual estaba exclusivamente supeditada a realizar requerimiento de los informes y/o reportes suministrados por el contratista tal y como lo establece el apéndice en la cláusula que se indica a continuación:

“Durante la ejecución del contrato, la Interventoría está obligada a verificar que el contratista organice los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Único 1076 de 2015, y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. La interventoría debe hacer seguimiento y exigir el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, Plan de Manejo Ambiental -PMA, según aplique y presentación de los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación del desempeño del contratista, tomando las acciones

necesarias y de competencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental y social.”

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

DE LA INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO IMPUTABLE AL CONSORCIO

Sea lo primero analizar para concluir la existencia de una eventual falla del servicio, la existencia de un daño que se deba resarcir. Al respecto, debemos señalar que el daño ha de ser consecuencia necesaria del hecho del victimario y no una mera condición o antecedente no necesario de su producción. Precisión ésta que se hace, en cuanto normalmente el daño es consecuencia no de un antecedente aislado, sino de varios, entre los que se encuentra la actividad del demandado. Y surge de esa circunstancia la cuestión de hasta dónde va cada antecedente en la producción del daño, problema este de hecho cuya resolución por el juez implica cierta dificultad.

Para el caso que nos ocupa y en lo relacionado con las causas que dan lugar a la producción del daño y la existencia de un perjuicio real imputable presuntamente a mi representada, resulta de suma importancia señalar las etapas de la imputación, a fin de establecer si es atribuible jurídicamente la imputación pretendida por los hoy demandados.

Conforme lo explica el doctrinante Antolisei *“La razón por la cual se requiere que entre la conducta y el evento exista un nexo de causalidad, consiste en que, solamente cuando exista, este evento puede ser referido o relacionado con el agente o impuesto a éste y cargado a él como fundamento de su responsabilidad, de suerte que cuando preventivamente se sabe que al demandado no se le puede imputar el evento dañino físicamente, porque la causa de éste reside en extraños, sin cuyo obrar no se habría producido, no se le puede cargar a él la responsabilidad, cualquiera que sea el grado de culpa en que él haya incurrido.”*¹ Aplicada esta noción de causalidad, si el daño no puede ser atribuido al demandado, éste debe ser necesariamente exonerado, pues cada uno debe ser juzgado de acuerdo con sus actos y omisiones.

Continuando con nuestro análisis sobre el daño, este debe ser cierto, esto es, debe haber pleno convencimiento de su existencia, en contraposición, al daño hipotético; la certeza del daño ha de fundamentarse en las pruebas aportadas o decretadas en el proceso, sin perder de vista, que la carga de demostrar los perjuicios, corresponde a quién solicita su reconocimiento so pena que no proceda indemnización.

En tal sentido la jurisprudencia colombiana en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 12 de febrero de 1992, invocando el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil afirmó *“que el legislador tiene establecido que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*. Igualmente, la Sección Tercera², ha sido enfática en señalar que *“el demandante no puede limitarse, si quiere sacar adelante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”*, que por además no pueden ser valoradas *“como si se tratara de hechos notorios o presumibles y no de situaciones cuya comprobación, por mandato legal, le correspondía al demandante.”*

Lo anterior, en razón a que no se está en presencia de una serie de supuestos fácticos que ameriten la aplicación de un esquema de responsabilidad estatal objetivo para el contratista; por ello resulta válido indicar que el único camino factible que queda disponible para establecer una eventual responsabilidad del Interventor, es determinar la presencia de un título jurídico de imputación subjetivo, es decir, de una falla en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista a cargo del mantenimiento del corredor conocido como “falla del servicio”, la cual corresponde al *“régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una*

¹ R. Antolisei. Apporto de Causalidad. Página 19.

² Sección Tercera del 18 de abril de 1994. *“No apareciendo acreditado el daño sufrido por la sociedad demandante, no puede entonces accederse a las peticiones incoadas en el libelo. Todo lo anterior, con apoyo en el principio de la carga de la prueba, la cual correspondía a la demandante según los hechos fundamentales de su demanda; principio según el cual le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (art. 177 del C.de P. C)”*

*obligación Estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración*³.

En este sentido, siguiendo la continua y consolidada línea jurisprudencial que sobre la materia se ha elaborado, para efectos de determinar si en el caso que nos ocupa se ha registrado una falla del servicio atribuible mi prohiada, debe establecerse la inobservancia de una obligación jurídica que exigiera de esta un comportamiento tendiente al despliegue de todos los medios y recursos disponibles para evitar la ocurrencia del resultado dañoso, concretado éste, según le accionante en la falta de acción de los demandados en el mantenimiento de la vía afectada, motivo presunto por el cual se ocasionó el accidente objeto de la presente controversia.

Así entonces, no habrá lugar a asignar una cuota de la responsabilidad en la causación del daño a la entidad INVIAS, y por lo tanto a la aquí llamada en garantía, si primero no se acredita que ésta ha faltado a sus deberes legales y reglamentarios en torno a las circunstancias que rodearon el accidente descrito en los hechos de la demanda, para lo cual desde ya debe tenerse en cuenta, por un lado, que la demostración de tal eventualidad sin duda compete a la parte accionante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, y por el otro, que tal como quedó completamente demostrado en el acápite anterior, **dicha entidad no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que se debaten en el presente proceso ni por acción ni por omisión**. En este sentido, como tiene bien sentado de antaño el H. Consejo de Estado:

“La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que, en aquellos supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario **efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro (...)** .

Para determinar si (...) se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la Administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación-, que era lo que a ella podía exigirsele; y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una Administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende⁴. (Negrillas fuera de texto)

Ahora bien, sobre este punto llamo la atención al Despacho respecto del hecho de que, de la lectura del escrito de la demanda, no se observa en forma alguna cuáles son los fundamentos de la entidad que llama en garantía para imputar responsabilidad al Consorcio que represento, pues no se establece cuál fue la obligación de corte jurídico que a su juicio haya sido incumplida.

Adicionalmente, si lo que alega la parte demandante es la falta de supervisión por parte de los contratistas, no puede perderse de vista que el Consorcio en ninguna oportunidad ha desconocido o incumplido -por acción u omisión- sus deberes, obligaciones y funciones en relación con los hechos descritos en la demanda y, en consecuencia, ha de ser absuelta de todo cargo, al no estar probada la injerencia o falla por parte de la interventoría.

Ahora bien, no hay asidero plausible que lleve al Consorcio a tener que responder por la caída de la rama, pues no recibió informe o reporte alguno por parte del contratista, ni mucho menos de la autoridad ambiental que tenía los árboles bajo su custodia.

Por el simple de hecho de transitar por la carretera al momento del accidente no quiere decir que inmediatamente la responsabilidad le pueda ser endilgada al interventor que solo debe responder por los reportes e informes suministrados por el contratista para analizar el avance de sus obras y que las mismas se cumplan según los requerimientos de la entidad contratante.

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril de 2007, Exp. No. AG 2002-00025-02, MP. Dra. Ruth Correa Palacio.

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 2008, Exp. 15563, MP. Dra. Myriam Guerrero de Escobar.

Por último, no sobra recordar que el estudio de la falla del servicio se debe acometer acorde a la jurisprudencia, bajo un método “relativo”, es decir, ciñéndose a las condiciones particulares que rodean los eventos juzgados. Y en el caso que nos ocupa, de conformidad con los medios probatorios recaudados hasta ahora, no es posible concluir que la interventoría tuviera conocimiento de la presencia del árbol que ocasionó el accidente referido.

En este orden no es factible concluir que la el INVIAS haya incurrido en ‘falla del servicio’ en virtud de la interventoría, de cara a los contenidos obligacionales a los cuales se halla sometido, motivo por el cual no se le podrá imputar responsabilidad alguna a las demandadas al no acreditarse uno de los tres elementos previstos por el artículo 90 de la Constitución Política para la cristalización de la responsabilidad estatal extracontractual: el título de imputación.

DE LA INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL RESPECTO DE LA INTERVENTORÍA

Es bien sabido que uno de los requisitos de la responsabilidad jurídico-patrimonial, tanto contractual como extracontractual, está dado por la existencia del nexo causal entre la conducta u omisión desplegada por la entidad estatal, por medio de sus agentes, y el daño antijurídico padecido por la víctima, de forma tal que, si la víctima sufre un daño, pero el mismo no se derivó a partir de dicha conducta u omisión, no es posible endilgar responsabilidad alguna al extremo demandado.

Así se ha pronunciado el tratadista Javier Tamayo Jaramillo en su obra, en consideraciones que, si bien se encuentran en principio dirigidas al campo de la responsabilidad civil, son extensibles a los terrenos propios de la responsabilidad estatal:

“(...) puede suceder que una persona se haya comportado en forma ilícita y en forma paralela o simultanea un tercero haya sufrido un perjuicio. En tales circunstancias no existirá responsabilidad civil de quien se comportó en forma ilícita, mientras dicha persona no haya sido la causante del perjuicio sufrido por la víctima.”⁵

Al respecto, resulta pertinente resaltar, cómo la existencia del nexo causal entre el hecho dañoso y el daño sufrido por el reclamante, **nunca se presume**, de forma tal que siempre debe probarse con la suficiente certeza dentro del proceso, lo cual guarda necesaria correspondencia con la carga probatoria prevista por el artículo 167 del Código General del Proceso, la cual, como es sabido, se encuentra radicada en cabeza de la parte actora y por qué no igualmente del INVIAS como entidad que nos llama en garantía.

Por ende, es claro que la existencia del nexo causal debe verificarse y aparecer de manera cierta, conforme a las pruebas que obran en el proceso, para lo cual no basta la sola intervención del demandado en la cadena de sucesos que rodearon la ocurrencia del hecho dañoso, pues es indispensable que se demuestre, de manera idónea, que la condición que dicha conducta –bien sea activa u omisiva- se erija en la causa adecuada⁶, exclusiva, normal y directa del daño, de manera tal que el mismo supere la connotación propia de elemento meramente interviniente en la historia causal, para posarse en el lugar propio de la causalidad adecuada para la producción del daño irrogado a la esfera ajena.

Ahora bien, la existencia del nexo causal puede enervarse en virtud de tres elementos fundamentales, a saber: Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Hecho de un Tercero, o por el Hecho de la Víctima. Es así como, cuando se verifica cualquiera de estas tres hipótesis, **se produce la ruptura del nexo causal, en virtud de lo cual, al faltar este elemento fundamental, no surge responsabilidad alguna a cargo del agente en virtud de los hechos acaecidos.**

Así pues, descendiendo las anteriores consideraciones al caso en concreto, habrá de tener en cuenta el señor Juez, según lo consta en los documentos contractuales que rigen las

⁵ Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Legis. Tomo I. Pág. 224.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 14699 del 20 de abril de 2005, CP. Dr. Ramiro Saavedra

obligaciones del interventor, todas van a encaminadas a realizar un control de las actividades del contratista, por lo que nuestro trabajo depende de los reportes e índices de avance de actividades que comparamos con los parámetros establecidos en el corredor vial por la entidad estatal.

Respecto de la responsabilidad de los interventores en los contratos de obra, al respecto ha determinado el Consejo de Estado⁷ que pese a la naturaleza del contrato de interventoría, en el evento en que el contratista vigilado incurra en incumplimiento, ello no se traduce en que por esta circunstancia la labor de la interventoría automáticamente adolezca del mismo reproche o que ese hecho pueda entenderse o equipararse como una desatención de las obligaciones contraídas en el marco de ese vínculo negocial. No puede perderse de vista que la tarea del interventor se centra en realizar el seguimiento técnico, financiero y jurídico del contrato sobre el que recae su objeto, más no en asegurarlo, como si se tratara de un contrato de garantía o de una obligación de resultado; por manera que la gestión del interventor puede considerarse cabalmente satisfecha cuando este formula correctivos, informa a la entidad acerca de hechos de incumplimiento del contrato inspeccionado que darían lugar a la imposición de sanciones, recha o se abstiene de recibir obras, bienes o servicios prestados.

En resumidas cuentas, no se trata de una labor con obligación de resultado sino de medios en su gestión, descartando de plano la posibilidad de imputarle casi que de manera objetiva cualquier tipo de responsabilidad en los eventos en que se presente algún tipo de daño o altercado dentro del corredor vial.

Ahora bien, en cuanto a la imputación del daño, tal elemento de la responsabilidad civil, obedece a *“la atribución jurídica de un hecho a una o varias personas que en principio tienen la obligación jurídica de responder”*⁸ por estar ese comportamiento contrariando a una norma o por lo menos resulta siendo contrario a la norma. En ese orden, la imputación responde a la pregunta de, ¿A quién es imputable jurídicamente el daño objeto de la presente Litis? Esta pregunta es fácil de resolver si solo analizamos quién era la entidad encargada de hacer el mantenimiento y control de los árboles a lo largo del corredor vial. Para responder a este interrogante, es crucial analizar la injerencia de otras entidades no vinculadas al presente caso y que eventualmente estarían llamadas a responder.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC)

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es un ente descentralizado de carácter público, creado mediante el Decreto No. 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto Legislativo No. 1275 de 1994. Está dotado de autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica. A partir del 1º de enero de 1995, la CVC asumió el manejo ambiental en la jurisdicción del Valle del Cauca (exceptuando el área urbana del municipio de Cali y los Parques Nacionales Naturales ubicados en este departamento), al igual que el manejo ambiental del Pacífico Vallecaucano.

En cuanto al Permiso o Autorización Aprovechamiento Árboles Aislados, se debe indicar que es el permiso o autorización que otorga la CVC, para aprovechar o talar árboles aislados de bosques natural, o talar, podar, trasplantar o reubicar árboles plantados, que se encuentren ubicados en terrenos de dominio público o privado, respectivamente, que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario, ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones.

Para entender más esta figura se debe hacer uso del DECRETO 1791 DE 1996 el cual en su artículo 23 establece los requisitos que se debe cumplir para pedir estas autorizaciones que no están dadas automáticamente a los contratistas en atención a que la custodia y control de los árboles corresponden a las autoridades administrativas, tal y como se indica a continuación:

⁷ Sentencia 69492 del 17 de octubre de 2023.

⁸ Héctor patino. Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. En la página 197 cita en cuanto al concepto de imputación al Doctor Juan Carlos Henao. Revista de Derecho Privado No. 14 de 2008.

“Artículo 23.- Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.”

No está demás aclarar, que si bien la CVC como máxima autoridad ambiental y quien tiene el control de los árboles dentro del corredor vial, es ella quien debe ser llamada como garante de su cuidado y atención debido a que a todos los particulares les está vedada la posibilidad de cualquier intervención sin el previo visto bueno de la misma.

DE LA EVENTUAL MULTIPLICIDAD DE CAUSAS EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

En el remoto evento en que el Despacho encuentre probada la responsabilidad del Consorcio, deberá tener en cuenta que la actuación de ésta, de ninguna manera puede tenerse como la causa exclusiva del daño, y por lo tanto, una eventual condena tendrá que asignarle sólo responsabilidad parcial, como se explica a continuación.

En efecto, cuando en la producción de un daño concurren dos o más causas independientes, la responsabilidad de indemnizar ese perjuicio debe repartirse entre los causantes del mismo; así lo ha admitido la jurisprudencia y la doctrina. Particularmente, cuando la actuación de un agente concurre **con el hecho de un tercero -CVC**, como causa adecuada e independiente de un mismo resultado dañoso, la responsabilidad derivada de esa situación tendrá que repartirse en abstracto entre dicho agente y estas causas extrañas, atenuándose la carga indemnizatoria que le corresponda al primero.

Por lo tanto, y como en cualquier evento en que concurra el hecho de un tercero, las consecuencias perjudiciales que se deriven del daño tendrán que ser asumidas por quien intervino en su producción.

GENÉRICA.

Solicito comedidamente al Despacho dar por acreditado cualquier otro medio exceptivo que desestime total o parcialmente las pretensiones del llamamiento en garantía, diferente a los enlistados a lo largo del presente acápite.

VI. PETICIÓN

Solicito a usted respetuosamente exonerar al **CONSORCIO EURO- MUR**, de la responsabilidad sobre todos y cada uno de los hechos objeto de la presente demanda, toda vez que no se encuentran probados los supuestos fácticos que demuestren su eventual responsabilidad, ni la relación de causalidad necesarias para declarar ni condenar a mi apoderada, de conformidad con lo anteriormente expuesto.

VII. ANEXOS

1. Poder debidamente conferido.
2. Certificado de conformación del CONSORCIO EURO- MUR.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de las sociedades que integran el consorcio.

VIII. NOTIFICACIONES

Por mi parte las recibiré en la dirección electrónica Alvaroedd@hotmail.com.

Del Señor Juez,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvaro', with a long horizontal line extending to the right.

ALVARO DIAZGRANADOS DE PABLO

C.C. N° 85.154.567 de Santa Marta.

T.P. N° 206.576 del C.S. de la J.